



****TRADUCCIÓN NO OFICIAL****

Larry Sacks
Director de la Misión
U.S. Agency for International Development (USAID)
Bogotá, Colombia

22 de marzo de 2022

Estimado Larry,

Apreciamos mucho la oportunidad de proporcionar información sobre la programación de USAID. El 1 de marzo, me reuní con su personal en Bogotá y el 7 de marzo participamos en la consulta anual con las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos. Como saben, antes de estas reuniones llevamos a cabo una encuesta informal con nuestros socios para saber dónde creen que la financiación de USAID podría colocarse mejor teniendo en cuenta la evolución del país y las opiniones sobre la programación actual. En esta ocasión, nos pusimos en contacto con más de 90 colombianos afiliados a 40 o más organizaciones de la sociedad civil. Aunque los resultados preliminares se compartieron en las dos reuniones mencionadas anteriormente, quería ofrecerles un resumen escrito y nuestro análisis de la información recibida.

Nuestros socios indicaron que los siguientes temas deben ser apoyados por USAID:

1) *Mecanismos establecidos por los acuerdos de paz de 2016 con las FARC*

Los diferentes mecanismos, especialmente la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) han encontrado múltiples obstáculos. No están funcionando a pleno rendimiento. Para garantizar el avance efectivo del acuerdo y en particular el cumplimiento del Capítulo Étnico, las disposiciones de género y la protección de líderes sociales y excombatientes, estas entidades requieren ser fortalecidas. En 2021, el IEANPE dio a conocer su primer informe que abarca el período 2017 a 2021. La falta de voluntad política y la falta de prioridad de la paz por parte del gobierno de Duque, así como la insuficiencia de recursos, están debilitando la eficacia de estos mecanismos que son muy necesarios para la correcta implementación del acuerdo.

2) *Aplicación del capítulo étnico*

Además de hacer que el IEANPE funcione eficazmente, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que forman parte del Consejo de Paz Afrocolombiano (CONPA) y la Comisión Étnica (Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC y Autoridades Indígenas de Colombia-AISO) requieren financiación. En particular, se necesita apoyo para que el Secretario Técnico y otros puedan ir a los territorios a consolidar una reforma rural integral, alternativas a los cultivos ilícitos y PDET con enfoque étnico diferenciado.

El reciente evento organizado por USAID sobre los PDETs étnicos fue muy bien recibido. El objetivo ahora debe ser hacer un seguimiento y cerrar las brechas que se presentaron en el evento. Además, se necesitan intercambios entre las organizaciones en Bogotá y los territorios étnicos para generar una retroalimentación constante de ida y vuelta sobre cómo están progresando las cosas. Por último, se requiere una campaña educativa más amplia sobre el Capítulo Étnico, que explique qué es y por qué es importante para el público en general. Esta campaña puede incluir anuncios, vídeos de testimonios de líderes destacados y víctimas, y guías escritas sobre las formas de garantizar el enfoque étnico del acuerdo.

3) *Desmantelar los grupos armados ilegales y la corrupción entre dichos grupos y los miembros de la fuerza pública*

Los grupos armados ilegales seguirán reagrupando, proliferando y reclutando nuevos miembros mientras el enfoque para abordarlos se limite a combatirlos militarmente. Para abordar verdaderamente este problema, es necesario abordar las razones estructurales que llevan a las personas a unirse a estos grupos. Es necesaria la aplicación efectiva de las disposiciones del acuerdo de paz de 2016 para los excombatientes y el inicio del diálogo con otros grupos armados ilegales. Al mismo tiempo, se necesitan opciones que incentiven la desmovilización de los actuales miembros de los grupos no guerrilleros y los lleven ante la justicia. Dicho esto, se puede hacer mucho más para privar a estos grupos de su capacidad de obtener y ejercer el control territorial en zonas del país. Centrarse en abordar la corrupción y la connivencia entre estos grupos y los miembros de la fuerza pública ayudaría a contener su capacidad de operar en zonas con impunidad.

4) *Protección y justicia para los líderes sociales*

Aunque se está haciendo mucho para intentar proteger a los líderes sociales, estos crímenes no disminuirán hasta que el gobierno colombiano muestra una fuerte voluntad política para evitar que se produzcan asesinatos. Es necesario que haya una justicia rápida y orientada a los resultados que envíe el mensaje de que no se tolerará este tipo de violencia, y que los autores sufrirán las consecuencias. Este mensaje debe

ser fuerte desde las amenazas iniciales hasta las acciones violentas reales. La sensación es que el gobierno colombiano está más interesado en aparentar que está logrando cambios que en asegurarse de que los haya.

El actual sistema de medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) presenta muchos problemas. Es caro e ineficaz. Para aquellos que pueden incluso obtener protección, el sistema se ha vuelto burocrático y pesado. La prestación de servicios lo ha hecho vulnerable a la corrupción y a la ineficacia. La subcontratación es problemática, costosa y puede socavar la protección. Sigue estando diseñado para satisfacer mayoritariamente las necesidades de los individuos que requieren protección en entornos urbanos y no de los colectivos situados en entornos rurales. Las medidas no están debidamente diferenciadas para proteger a los géneros no masculinos. Las evaluaciones de riesgo toman demasiado tiempo, no implican una consulta suficiente con los receptores, y se ven empañadas por suposiciones anticuadas y por la discriminación de los líderes afrocolombianos, indígenas y rurales. La responsabilidad de defender sus medidas recae en el beneficiario. Los tipos de medidas previstas no integran la opinión de los beneficiarios sobre lo que es más eficaz. Los requisitos de solicitud de permisos de viaje no permiten la flexibilidad real necesaria para que los líderes sociales realicen su trabajo con eficacia. No siempre se cubren los costes totales de los guardaespaldas necesarios para su acompañamiento. A menudo, las medidas previstas no responden plenamente a las necesidades del beneficiario. Las medidas se levantan con la consulta de los receptores y sin un plan de transición que garantice la seguridad de la persona después de las medidas.

Sin embargo, incluso las medidas de protección más eficaces sólo servirán como tiritas si la impunidad sigue siendo rampante en los casos de asesinatos de líderes sociales. Los autores de este tipo de violencia – amenazas de muerte, intimidación, agresiones físicas y asesinatos – deben recibir el mensaje de que sus acciones tienen consecuencias. A pesar de los esfuerzos de USAID por hacer avanzar la justicia en estos casos, la falta de resultados rápidos y el encarcelamiento de los autores intelectuales, hacen que estos asesinatos sigan produciéndose. Los asesinatos siguen siendo la forma preferida de silenciar a quienes revelan las duras verdades y defienden los derechos humanos, étnicos, medioambientales y de la tierra. Aunque la comunidad internacional y de derechos humanos sigue condenando estos crímenes, se han normalizado en la sociedad colombiana en general. Todavía se requieren esfuerzos para cambiar esta mentalidad junto con una prevención, protección y justicia efectivas.

5) *Informe de la Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial para Macrocasos de Paz*

Este año la Comisión de la Verdad publicará su informe con recomendaciones y mecanismos de seguimiento. Al mismo tiempo, la JEP comenzará a dictar sentencias. Es probable que ambas cosas sean recibidas con reacciones negativas por parte de quienes no desean escuchar las verdades del conflicto y se resisten al cambio. El capítulo étnico del informe de la Comisión de la Verdad será especialmente controvertido, ya que es

probable que toque las duras verdades del racismo, la discriminación, el legado del colonialismo, el clasismo y la religión. Por ello, es esencial que USAID apoye estos esfuerzos ayudando a socializar las conclusiones, su importancia y cuáles son los próximos pasos para garantizar la no repetición de los hechos. El enfoque étnico diferenciado necesitará pedagogía a muchos niveles en todo el país. Al mismo tiempo, USAID debería apoyar los intercambios entre las víctimas y el sistema de justicia transicional, así como los esfuerzos que ayuden a las organizaciones a proporcionar información a los tres aspectos del sistema de justicia transicional.

Se recomienda que USAID también apoye los esfuerzos que fortalecen la justicia transicional que la sociedad civil está iniciando fuera de estas instituciones. Estos esfuerzos incluyen la reconstrucción de la conmemorativa y el empoderamiento de las víctimas. También, los encuentros entre los responsables de cometer abusos durante el conflicto que quieran revelar la verdad, los detalles de los incidentes ocurridos y reconciliarse con las víctimas. Dadas las limitaciones del sistema de justicia transicional, es importante que se protejan los esfuerzos por preservar las pruebas y la información sobre los casos proporcionado por las personas que esperan una decisión de la JEP sobre su admisibilidad. Una entidad que podría ser apoyada para hacer esto es la Comisión de Ética. Se trata de proteger pruebas e información importantes sobre casos aún no determinados.

6) *Reincorporación de antiguos combatientes*

Ahora que la administración Biden ha sacado a los ex combatientes de las FARC y los Comunes de la lista de terroristas, sería bueno que USAID apoyara los esfuerzos de reincorporación social y económica. Tal vez el mejor enfoque sea hacer proyectos mixtos que incluyan a excombatientes y a otras personas, de modo que se genere confianza y se apoye la reconciliación en las comunidades afectadas. En la construcción de viviendas, por ejemplo, podrían participar los locales y los reincorporados. En particular, son preferibles los esfuerzos que ayuden a fortalecer el tejido social, la convivencia y la reconciliación. Los excombatientes necesitan ayuda para generar ingresos sostenibles y proyectos de vida económica y para acceder a las tierras. Las cooperativas que están produciendo diferentes bienes agrícolas requieren apoyo técnico para que puedan llevar efectivamente estos bienes a los mercados. Es importante que estos esfuerzos incluyan enfoques diferenciados por género, etnia y edad. Hay otros esfuerzos en marcha que los Estados Unidos debería considerar apoyar como el grupo de desminado Humanicemos DH. Como en todos los proyectos apoyados por USAID, es importante que los ejecutores y los proyectos de los receptores se combinen con planes que garanticen la seguridad de todos los implicados.

7) *Reforma policial y responsabilidad por los abusos*

Una de las principales preocupaciones de muchos es que los esfuerzos de reforma policial que se están llevando a cabo en la actualidad sólo se traduzcan en cambios cosméticos. Si este es el caso, entonces sólo será cuestión de tiempo antes de que

veamos otro ciclo de protestas que se encuentran con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ESMAD generando más víctimas. Para las mejores recomendaciones sobre cómo garantizar una reforma policial efectiva y estructural a nivel nacional, recomendamos reunirse directamente con la Campaña para Defender la Libertad y Temblores, además de seguir las recomendaciones hechas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el mejor camino a seguir en la ciudad de Cali para garantizar una efectiva reforma policial y justicia para las víctimas y sus familias, animamos a consultar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Arzobispado de Cali.

Aunque USAID no sea la agencia estadounidense que financia directamente los proyectos con la Policía Nacional, la percepción de muchos es que el gobierno de los Estados Unidos está equivocado en la forma de abordar este problema. Existe la percepción de que tanto el reciente aumento de la ayuda a la policía como las declaraciones hechas en las redes sociales y en otros lugares apuntan a que los Estados Unidos aceptan la conducta de la policía nacional durante el Paro Cívico de 2021, que provocó muchas muertes, la extracción de los ojos de muchos manifestantes, la violencia de género y otros abusos.

8) *Abordar la crisis multidimensional de la movilidad humana*

La dramática situación que viven los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia es bien conocida y sigue requiriendo atención. Sin embargo, es importante mencionar que la situación humanitaria y migratoria en Colombia se está volviendo extremadamente compleja. Colombia se está convirtiendo cada vez más en un corredor para migrantes de múltiples nacionalidades que buscan cruzar a Panamá para luego viajar a la frontera entre México y los Estados Unidos. El número de estas personas está superando las capacidades de los municipios y de las autoridades y organizaciones locales para prestarles asistencia. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el desplazamiento interno en 2021 fue un 181% mayor que el año anterior. Esto significa que existe una crisis multidimensional de movilidad humana que requiere una estrategia que incluya la defensa de los derechos y las necesidades humanitarias de las personas afectadas, independientemente de su categoría legal.

Para garantizar la protección de los civiles atrapados en medio de la violencia perpetrada por los grupos armados ilegales en las zonas del Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Arauca y Catatumbo, los encuestados insistieron en el apoyo de la comunidad internacional a las diferentes iniciativas de acuerdos humanitarios y al restablecimiento del diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El

respeto de los mínimos humanitarios básicos contribuiría en gran medida a disminuir los abusos contra la población civil.

9) Protección de los jóvenes, las mujeres y las personas LGBT

Varios mencionaron la necesidad de dialogar con los jóvenes como medio para realizar cambios en la reforma policial, el sistema político y la construcción de la paz y la democracia. Sus voces en términos de recomendaciones sobre la paz, las políticas públicas y la educación para la nueva administración que comienza el 7 de agosto son importantes. Se señaló que la determinación de quién debe participar en estos diálogos, debe hacerse consultando a la sociedad civil. Estos diálogos deben ocurrir independientemente del gobierno nacional.

Varios mencionaron que se requiere un énfasis renovado en la protección de los jóvenes, las mujeres y las personas LGBT+. Se recomendó que USAID inicie esfuerzos educativos y mediáticos que ayuden a abordar el racismo, la discriminación, la misoginia y la LGBTfobia. Se señaló que la polarización política en el país a menudo conduce a ataques virales y de otro tipo contra la población afrodescendiente, los indígenas, las mujeres, los jóvenes y las personas LGBT+. Por ello, se requiere un esfuerzo para contrarrestar esto y promover el respeto y la convivencia.

Además de las cuestiones temáticas que requieren atención, se nos informó de lo siguiente:

- Recibimos muchos comentarios positivos sobre los proyectos implementados directamente por los socios colombianos y sobre la preocupación y el apoyo de USAID a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para los programas que pronto terminarán, se recomienda que se lleve a cabo un proceso de evaluación y de lecciones aprendidas y que esos hallazgos se incorporen a la siguiente ronda de ejecutores. Se recomendó que USAID continúe con sus esfuerzos para financiar directamente a las ONG colombianas, a la sociedad civil y a las organizaciones afrocolombianas e indígenas. Para los temas estructurales de largo plazo, como la implementación de la ley de tierras y derechos de las víctimas, se espera que USAID continúe su apoyo durante el período en que se extendió el proceso.
- Algunos consideraron que la programación de USAID requería una supervisión más estrecha por parte de la propia USAID. Es decir, que USAID supervise más de cerca y activamente a sus contratistas y subcontratistas. Así mismo, varios pidieron que las evaluaciones de los programas se pongan a disposición del público para que se comprendan mejor sus resultados.
- Algunos pidieron que USAID diversifique las organizaciones de la sociedad civil y de base con las que interactúa. Los contratistas también deberían interactuar con una gama más amplia de organizaciones, incluidas las que tienen personas permanentemente sobre el terreno que trabajan en la protección del territorio, el género y el medio ambiente.

- Es importante para el nuevo programa afrocolombiano e indígena que quien dirija este programa y el personal sean representativos de estas comunidades. USAID ha jugado un papel en la diversificación de su personal y el de sus contratistas y esto debe continuar.
- Preocupa la forma en que el gobierno nacional colombiano está utilizando el interés en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente para buscar fondos para programas que pueden no estar en el interés de esos objetivos o ser implementados a expensas de los derechos de la población étnica y rural. Un ejemplo que se dio es la Operación Artemisa, que ha militarizado los esfuerzos contra la deforestación y ha generado abusos. USAID y la comunidad internacional deberían supervisar más de cerca cómo se ejecutan realmente los fondos relacionados con la protección del medio ambiente.
- Algunos mencionaron que no tienen claro lo que hace USAID en Colombia. Por ello, es necesario hacer un mayor acercamiento a la sociedad civil (incluyendo los sectores que no financia) para que pueda entender mejor el papel, el proceso y la programación de la agencia.

Esperamos su respuesta.

Saludos,



Gimena Sánchez-Garzoli
Directora para los Andes